

CIUDADANÍA Y
PROTESTA SOCIAL EN
CENTROAMÉRICA
El periodo neoliberal

® Instituto Universitario en Democracia,
Paz y Seguridad (IUDPAS)

Col. Lomas Del Guijarro Sur, Calle Madrid,
Bloque M, No. 26 Telefax: (504) 231-1005
Tegucigalpa, Honduras

El contenido de este material puede ser
reproductivo total o parcialmente en cualquier
forma o por cualquier medio, sea electrónico,
mecánico, fotocopiado o de otro tipo, siempre
Y cuando se cite la fuente.

Las ideas y opiniones expuestas en este libro
Son exclusivas responsabilidad de sus autores,
Y no reflejan necesariamente la visión, ni la opinión
Del Instituto Universitario en Democracia,
Paz y Seguridad (IUDPAS)

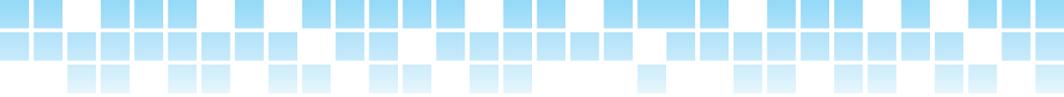
Para mayor información sobre esta publicación,
Puede visitar la página web www.iudpas.org
Asimismo, IUDPAS agradecerá los comentarios o
Sugerencias que pueda hacer sobre los trabajos
Presentados, mediante la dirección de
Correo electrónico info@iudpas.org

® **Instituto Universitario en Democracia,
Paz y Seguridad (IUDPAS)**

Col. Lomas del Guijarro Sur, Calle Madrid,
Bloque M, N° 26, Telefax: (504) 231-1005
Tegucigalpa, Honduras

E-mail: info@iudpas.org
www.iudpas.org

**El contenido de este materia se puede reproducir sin necesidad de
obtener permiso, siempre que se cite la fuente**



Presentación

El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) se complace en presentar la Colección Memorias del III Congreso de Investigación Científica que se celebró en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2009. Esta publicación ha sido posible gracias a la cooperación de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Agradecimiento a los ponentes: Eugenio Sosa, José Cal Montoya y a Roque Castro Suárez por sus aportes.

El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) fue creado mediante oficio N-CT-UNAH-126-2008 de fecha 14 de febrero de 2008 como resultado de las iniciativas que viene impulsando el Proyecto de Seguridad, Justicia y Cohesión Social en convenio con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

CIUDADANIA Y PROTESTA SOCIAL EN CENTROAMERICA: El periodo neoliberal

Por Roque Castro Suarez

Para el año 2007 Centroamérica contaba con 41.3 millones de habitantes. La población es mayoritariamente urbana aunque países como Honduras y Guatemala todavía concentran respectivamente el 52% y 50% de su población en las zonas rurales. Es una región de contrastes entre una mayor inclusión política frente a una baja integración económica y social, con mayor integración de los grupos económicos que controlan el nuevo modelo de acumulación sobre la base de una mayor exclusión social que alimenta el grave problema de la inseguridad y la violencia, la informalidad económica, la migración internacional y en otros casos la resignación.

-5-

Si bien externamente Centroamérica en otros momentos (la guerra) y en la actualidad (tratados de libre comercio) ha sido pensada como región, sin embargo, una de sus mayores dificultades para alcanzar mejores niveles de desarrollo pasa por reconocerse internamente como tal, frente a los desafíos de enfrentar problemas comunes como la dependencia energética, la inseguridad y la violencia, la pobreza y la desigualdad y/o el reto de administrar un patrimonio común como la biodiversidad y las ventajas de su posición geográfica en el contexto del comercio mundial. Además, frente al proceso de cambios que vive la región, que de suyo implican una nueva estructura de dominación regional, construir ciudadanía, tanto para la democracia como para el desarrollo, es su condición de posibilidad.

Ahora bien, si Centroamérica puede compartir elementos comunes entre problemas y desafíos, no se puede olvidar que la historia particular de cada país cuenta y mucho. El contraste entre

países que han configurado bipartidismos lo dice todo: Honduras y Costa Rica. Mientras el segundo alcanzó niveles importantes de desarrollo, el primero se rezagó.

Por otro lado, la guerra y los procesos de militarización dejaron profundas huellas en la población y en buena medida esta situación llevo a colocar una gran esperanza en la naciente democracia. Sin embargo, un alto porcentaje de la población vive un desencanto con esa democracia, incluso en la Costa Rica de mayor tradición democrática.

Un dato importante a tener en cuenta es que las causas que provocaron la guerra no mejoraron aunque se asientan sobre un entorno sociocultural distinto, de mayor complejidad. Las oligarquías no han desaparecido y como dice Edelberto Torres, “todavía la élite agraria se resiste a morir políticamente”. Además se pueden complementar bien con las otras elites que actúan en el sector moderno de la economía sin lograr modernizarse políticamente y sin aprender las lecciones de la historia que llevaron a la guerra. Y como si esto fuera poco tienen la buena compañía de los militares como ocurre en Guatemala, El Salvador y Honduras donde tienen presencia importante, en el caso de este último donde con los acontecimientos más recientes, se ha podido observar su fallida modernización.

Si se admite que la democracia en Centroamérica es más liberal que democrática (Torres, 2007), de todas formas no es fácil construir democracias en contextos primero marcados por la guerra y la militarización de la sociedad y luego con un neoliberalismo que fracturó aún más la polarizada región.

Centroamérica experimentó en las dos últimas décadas un proceso acelerado de cambios con un nuevo patrón de desarrollo que se sustenta en nuevas actividades económicas, lo que a su vez implica una nueva estructura de dominación regional

y transnacionalizada (en democracia), frente a unos actores populares y fuerzas de cambio sin la suficiente fuerza para revertir estas tendencias, con una estructura social más compleja (A. Morales, 2005), asociada con la globalización, la dinámica del consumo, las nuevas tecnologías y por la migración, además de la nueva dinámica demográfica.

Si bien las democracias electorales se han consolidado (con la excepción de Honduras) en la región, su base de legitimidad se ve fuertemente cuestionada por la persistente pobreza (mas del 40% de los centroamericanos, con un gasto social per cápita bajó respecto a la mayoría de países latinoamericanos) y la desigualdad, por la inseguridad y por la corrupción según los índices que presenta el istmo en la escala internacional.

Como señala Edelberto Torres, la ciudadanía como la democracia se encuentran entrapas en la realidad social. Mientras el tiempo se agota y no ha sido posible aprender las lecciones de la historia, particularmente por la persistencia de las causas que llevaron a la guerra en la región, situación no superada por los cambios que le siguieron, la ciudadanía (promovida desde los movimientos sociales y la acción colectiva) aparece como la condición de posibilidad de la democracia, el desarrollo y la mejor convivencia.

En este contexto operan los movimientos sociales, la sociedad civil, los tipos de ciudadanía o su ausencia y frente a este contexto se encuentran los principales desafíos de la región y para los actores sociales. Así tienen lugar movimientos con orientaciones mas estratégicas y otros con demandas más coyunturales (S.Yagenova, 2006), con formas de lucha que son espontaneas e inéditas y otras más tradicionales (B. Cuenca, 2001), donde además se combinan las movilizaciones y las acciones de protesta en la calle con la incidencia sobre las autoridades o los grupos de

poder; con la ausencia, con la excepción de Costa Rica, de mecanismos democráticos de manejo del conflicto (Porta y Diani, 1999).

Movimientos sociales, sociedad civil y ciudadanía en perspectiva democrática.

Si bien la diferenciación es importante entre los distintos actores de la sociedad, la articulación que se establece en la práctica y las contribuciones entre unos y otros es relevante cuando las acciones y representaciones convergen para profundizar la democracia y alcanzar niveles de desarrollo incluyente.

-8-

Se sostiene que la debilidad de la sociedad civil en América Latina es tanto una consecuencia como una causa de los caminos que se han seguido para el logro de los derechos ciudadanos. Si la ciudadanía es una construcción social, en la misma participan una variedad de actores. Históricamente la sociedad civil jugó un papel importante en la expansión de la ciudadanía. Como Hobson y Lindholm, (1997) han señalado que es a través de las luchas colectivas que se crean y se redefinen las identidades colectivas como fuentes de poder político (Oxhorn, 2002:20).

La prioridad que tuvo la transición dejó de lado la ciudadanía o en todo caso se valoraron los derechos políticos como panacea para resolver problemas importantes. Los movimientos sociales se subordinaron a los procesos de transición, la desmovilización fue necesaria para evitar una potencial reacción autoritaria pero la desmovilización afectó la posibilidad de mayor crecimiento de la sociedad civil (Oxhorn, 29).

Durante el proceso de transición lo urgente era crear la institucionalidad jurídico política para buscar la alternancia ordenada y pacífica del poder (Favela y Guillen, 2008: 21).

Por lo tanto el tema de la ciudadanía no tenía cabida. Son los malos desempeños institucionales lo que plantea la ciudadanía.

Los movimientos sociales temían que las movilizaciones pusieran en precario la transición, los jóvenes que habían tenido experiencia en las organizaciones populares, carecían de la misma en un contexto democrático. Por tanto tenían que adaptarse a la nueva realidad (Oxhorn, 2002:30). No obstante es pertinente señalar que las organizaciones populares, particularmente en el caso centroamericano, además de sus propios problemas internos entraron a la etapa neoliberal muy desgastados como consecuencia de la represión y en algunos casos producto de la división provocadas por los gobiernos de turno.

Empero el nuevo contexto neoliberal explica también las movilizaciones sociales. La defensa del Estado de Bienestar amenazado por las políticas de ajuste, moviliza a ciudadanos organizados y no organizados. Amplios sectores públicos se movilizan entre la reivindicación particular y la búsqueda de objetivos más generales. En un momento donde tiene lugar un proceso de mercantilización de todas las esferas de la vida, la ciudadanía se ve activada.

Durante el período neoliberal es común en América Latina las luchas contra la privatización, la defensa de los recursos naturales, así el despojo capitalista plantea la noción de derechos, que de ser considerados formales, pasan a ser vistos como positivos y reales. El empoderamiento de los ciudadanos es también resultado de estas luchas, la idea de “el derecho a tener derechos” cala hondo, incluso deviene en una mayor politización de la vida cotidiana. Hay que destacar a la vez que la noción de empoderamiento se ve fortalecida por la crisis de representación (Favela y guillen; 10).

En la medida que las demandas son concebidas y planteadas como derechos, abre posibilidades para la participación de los individuos (Favela y Guillen; 21). En la medida que ocurre una ampliación de la política, se abren espacios para la participación social no tradicionales, las prácticas además replantean nuevos espacios de participación que incluye asumir responsabilidades.

Las movilizaciones por otro lado, plantean también a la par de las instituciones formales el surgimiento de vínculos entre el Estado y la ciudadanía que pasan por las organizaciones sociales, la movilización se convierte además en un canal de interlocución con el Estado.

-10-

Ahora bien, la reivindicación ciudadana encuentra respaldo en la composición misma de los movimientos sociales más recientes en tanto son considerados pluriclasistas y multisectoriales. Es aquí donde se observa y se facilita una relación fecunda entre movimientos sociales, sociedad civil y la ciudadanía. De igual forma la fecundidad de la articulación es posible por la radicalidad del modelo de acumulación o por la persistencia de las distintas formas de colonización de la sociedad.

Para Jelin (1996) los movimientos sociales abren nuevos espacios institucionales que promueven la ampliación y el fortalecimiento de la ciudadanía.

Favela y Guillen señalan la dualidad de las luchas sociales. Por un lado las luchas sociales tienen como meta principal mejorar las condiciones de vida de los afectados por el neoliberalismo y por el otro, las nuevas formas de gestión social buscan modificar el Estado desde prácticas ciudadanas que van más allá del voto.

Ciudadanía y etnicidad

El abordaje del tema es sumamente complejo. Existe en la actualidad un debate abierto sobre la relación entre democracia, ciudadanía y grupos étnicos. Así en el debate tienen lugar diversos puntos de vista entre los que destacan la perspectiva de la ciudadanía sociocultural (De la Peña), la ciudadanía multicultural (Stavnhagen), ciudadanía diferenciada (Kymlicka), el sistema comunal de los grupos étnicos, entre otros.

Precisamente por las dificultades que cada perspectiva tiene y sobre todo aquellas que dejan de lado las desigualdades de carácter socioeconómico por enfatizar la dimensión cultural y/o ocultan las rebeliones y las demandas indígenas, la relación entre ciudadanía y la cuestión étnica es un locus importante para la participación y la deliberación.

Para países como Guatemala, Panamá, Honduras y Nicaragua el tema indígena es todavía un asunto pendiente. Si bien en algunos de ellos existen experiencias de participación y de representación (como los Comités Cívicos en Guatemala) las tareas de la democracia respecto a ello son arduas.

Los grupos étnicos y el modelo democrático necesitan mejorar las formas de representación y la acción colectiva de estos grupos para potenciar y ampliar también los tipos de intermediación de la sociedad.

No obstante es importante destacar que un rasgo característico de la protesta popular del periodo neoliberal en Guatemala es la incorporación de la dimensión étnica. Las organizaciones de derechos humanos tienen una gran presencia indígena; los campesinos demandan tierra no solo como medio de vida sino también en su dimensión simbólica como la madre tierra y; por

los sujetos que participan en las movilizaciones donde lo étnico es fundamental (Ibarra, 2006: 166).

En Guatemala sin embargo, se observa un contraste entre la región metropolitana con un nivel de desarrollo humano alto (0.82) en relación a los departamentos con presencia indígena como Alta Verapaz (0.35) con niveles bajos de desarrollo humano. Es un país donde el 60% de la población vive en el campo, exhibe una alta concentración de la tierra con un coeficiente de gini de 0,786, el más alto de América Latina (Torres Rivas, 329).

La población indígena de Guatemala es el 40% del total nacional (4.4 millones contra 6.7 millones de población mestiza, blanca y ladina). Además la población indígena fue muy afectada por el conflicto armado que fue racista y anti-indígena, provocando el asesinato de 80 mil mayas, 600 aldeas arrasadas con más de medio millón de desplazados. Las comunidades indígenas se dividieron porque el ejército creó las patrullas de autodefensa civil incorporando alrededor de un millón de personas como paramilitares.

La firma del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas en el marco de los acuerdos de paz marca el inicio de estado multicultural. Por mucho tiempo para la sociedad guatemalteca el problema indígena fue el problema campesino asociado con la tierra, lo clasista dejó de lado lo étnico. Es de destacar que todavía no se constituye un movimiento indígena como tal, aun cuando lo étnico se politiza y se reivindica la identidad étnica, sin olvidar las demandas desde su condición de clase (Torres, 331-333). Este mismo autor señala que se experimenta un activismo local donde lo indígena está presente, donde el clientelismo, el poder del terrateniente, el caudillo, el jefe militar, la iglesia, median... restringen la ciudadanía indígena. Los indígenas han vivido en condiciones de desigualdad y sin reconocimiento. Se ofrecieron derechos políticos pero no los civiles.

Las luchas tienen también una dimensión local

Una de estas luchas ocurren en Nicaragua donde a raíz de la crisis de los precios del petróleo los transportistas demandan aumentar las tarifas o un subsidio compensatorio a la alcaldía de Managua, en ese momento liderada por Sandinistas. Mientras los liberales se oponen, los sandinistas buscan cobrar impuestos a la importación e importar petróleo de Venezuela. Sin encontrar respuestas los transportistas sandinistas suspendieron el servicio y luego aumentaron tarifas. Esta situación generó una serie de protestas de los estudiantes bloqueando calles, quemando buses y enfrentamientos con la policía. Después de varios días se llegó a un acuerdo, luego que estudiantes, organizaciones comunitarias y transportistas demandaran el subsidio a cambio de mantener las tarifas (Serra, 2006).

Como sostiene Serra, muy ligado al tema del transporte también se realizaron manifestaciones por parte de algunas organizaciones y de municipalidades tomándose carreteras, marchas a oficinas de gobierno y Asamblea Nacional: las demandas estaban orientadas a exigir la reparación y construcción de carreteras entre Matagalpa y Jinotega principales zonas productoras de café. Es de señalar que el Gobierno ha priorizado las carreteras del Plan Puebla Panamá vinculadas al CAFTA.

De igual forma, conforme a Serra, en varias ciudades de Nicaragua se llevan a cabo movilizaciones a raíz de la crisis energética y del problema del agua. Las marchas son convocadas por la Unión Nacional de Asociación Consumidores y Usuarios, la Red Nacional de defensa de los consumidores (RNDC). Las organizaciones comunales, otras organizaciones de comerciantes y panaderos se suman a las movilizaciones. Se demanda rescindir

el contrato de la empresa UF, revisar las tarifas y el pago de equipo dañado por los apagones. Es una protesta por los efectos de los servicios privatizados.

Por otro lado, en Guatemala tienen lugar las luchas de los vendedores ambulantes (2001) que van dirigidas contra el gobierno local. Se observa como los mayoristas toman el liderazgo y manipulan la agenda a su favor en perjuicio de los otros locatarios. En el Salvador los vendedores ambulantes también se han tenido que enfrentar con la alcaldía de izquierda de Héctor Silva. Para este gobierno local la lucha contra los vendedores ambulantes era un gran problema ya que en su promesa de campaña habían propuesto recuperar el Centro Histórico. (Breny Cuenca, 2001).

En la medida que se experimenta un nuevo ciclo de expansión del capital transnacional hacia el control de recursos naturales y el TLC, en el caso de Guatemala se libran batallas en las comunidades noroccidentales donde habitan mayormente indígenas. (Simona Yagenova, 2006).

En Costa Rica la Asociación de Vendedores Ambulantes (ACOVEA) tuvo conflictos con la Alcaldía de San José. Al final los vendedores fueron desalojados. En Honduras también desde hace varios años se venían generando conflictos entre los vendedores ambulantes (ubicados en las plazas centrales) y los gobiernos locales de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Después de varias negociaciones los vendedores ambulantes fueron reubicados.

Las luchas contra el neoliberalismo

En este periodo las protestas contra el modelo neoliberal son las más duras batallas protagonizadas por las organizaciones sociales y la ciudadanía debido al tipo de conflicto desatado, la prolongación e intensidad del mismo y por la cantidad de la población movilizada.

Las principales protestas durante el modelo neoliberal en Centroamérica tienen lugar en el sector público, en defensa de las condiciones de vida (magisterio), los derechos adquiridos y contra las políticas neoliberales particularmente de privatizaciones. Además las protestas contra la firma de los tratados de libre comercio y la oposición al Plan Puebla Panamá.

En Costa Rica en 1995 tuvo lugar una huelga del magisterio nacional exigiendo condiciones salariales. En este marco las protestas se orientaron a defender las condiciones de trabajo (aumento y pago de salarios, cancelación de pensiones, prestaciones e indemnizaciones, la defensa de contratos colectivos y libertades sindicales (Mora; 152). Sin embargo, la principal movilización en este país fue la que se realizó en el año 2000 contra la privatización del Instituto Costarricense de Comunicación y Electricidad. Por otro lado, desde el año 2002 se vienen realizando protestas contra los TLC pero no son conflictos visibilizados por la prensa. En el año 2006 se realizó el referéndum que finalmente aprobó la firma del Tratado de Libre Comercio. Cabe destacar que el “sí” del referéndum se logró por estrecho margen lo que evidencia un tipo de fractura y un gran descontento contra las políticas neoliberales y la política misma, que además se evidencia en los procesos electorales, debilitando el bipartidismo en un marco de creciente abstención.

En El Salvador desde 1999 hasta 2003 ocurre la huelga de los médicos y los trabajadores de salud del Instituto de Seguri-

dad Social. Estos movimientos ya tenían antecedentes después de la firma de los acuerdos de paz en 1992. Las luchas en principio se orientaron por aumentos salariales pero luego las demandas se dirigieron contra la privatización del ISSS y del Sistema de Salud.

El conflicto inicio porque la directora del ISSS no cumplió con el contrato colectivo previamente pactado. Luego el conflicto se amplio con la participación del Sindicato de Médicos y trabajadores del Instituto de Seguridad Social (SIMETRISSS) mas allá de las demandas salariales que el Sindicato de Trabajadores del ISSS consideraban prioritarias (Juárez, 2007).

-16-

Ahora bien, en el caso salvadoreño, según plantea Juárez, se discute la importancia del apoyo del FMLN o el aislamiento de este del conflicto. Quizá el hecho de que uno de los dirigentes del SIMETRISSS se convirtió posteriormente en candidato a Vicepresidente en la formula de Shafick Handal en las elecciones de 2004, contribuye a sanjar las dudas. Para el FMLN las condiciones heredadas de la guerra (matanzas, exilios y la clandestinidad de la guerra) privo al Frente de arraigo social. No obstante lo señalado, se reconoce las dificultades de la izquierda para adaptarse a la nueva realidad y padecer los vicios de la política tradicional: clientelismo y particularismo.

Por lo anteriormente planteado se destaca que después de los acuerdos de paz de 1992, el acontecimiento novedoso y relevante fue la huelga contra el ISSS y contra la privatización del Sistema de Salud. Las organizaciones sindicales cobran nuevos brillos con la creación del Movimiento de Organizaciones Laborales Integradas (MOLI) que aglutina a los sindicatos del sector público y permite la solidaridad entre ellos.

El caso de Guatemala es particular porque frente a medidas impositivas convergen en la lucha los sectores populares

con los sectores empresariales y con el apoyo de los medios de comunicación. En el año 2001 el gobierno de Alfonso Portillo, apoyado por el FMI anuncia el aumento del IVA de 11 al 13% y el aumento de impuestos de 2.5 a 3.5% a las empresas mercantiles y agropecuarias, se aumentan impuestos a las bebidas y cigarrillos, productos todos controlados por los empresarios. A estos conflictos se suman las demandas de los maestros por aumentos salariales, la CGT que solicita reformas al Código del Trabajo y las organizaciones del medio ambiente que protestan contra la tala del bosque, además de las denuncias contra la corrupción. Todas estas cosas juntas llevaron a una situación de ingobernabilidad que por momentos plantearon los rumores de golpe de Estado (Cuenca, 2001).

Después de los acuerdos de paz firmados en 1996 los mismos no mostraban avances. Las expectativas se desvanecían, principalmente entre las organizaciones campesinas e indígenas. El año 2005 se observaban los signos de agotamiento provocados por el neoliberalismo y los escasos desempeños de la democracia y de la institucionalidad estatal.

Por su parte en Nicaragua en el año 2005, como sostiene Serra (2006), se generó una crisis de gobernabilidad en parte por los acuerdos del Partido Liberal Constitucionalista y el FSLN por el control de los poderes y por los acuerdos del Presidente Bolaños con el gran capital y con Estados Unidos. Ambos acontecimientos desataron una serie de protestas y éstas se agudizaron por el crecimiento de la deuda interna y la priorización de su pago en relación a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. A ello se sumaron el recorte del gasto social y el congelamiento de los salarios lo que también devino en protesta por parte de los empleados públicos, maestros, médicos y trabajadores de la salud. La huelga de estos trabajadores duró seis meses hasta lograr un acuerdo con un aumento del 30% de los salarios. Luego vinieron incumplimientos y de nuevo más protestas.

Serra señala que también este año los maestros y estudiantes se movilizaron en Nicaragua defendiendo la Ley General de Educación que no tenía el respaldo del Fondo Monetario Internacional. Después de varias protestas se logró negociar aumentos en el presupuesto pero sin afectar la propuesta del Fondo Monetario. Entre 1995 y 1997 por presiones del Banco Mundial y el Fondo Monetario el presupuesto de la universidad es reducido lo que genera una ola más de protestas en este sector.

De nuevo destaca Serra que en Nicaragua se genera a su vez una crisis energética y de los servicios del agua. La privatización de ambos servicios es rechazada por la población, principalmente el alza de las tarifas y los subsidios que el Estado otorga. Como resultado se entra en un plan de racionamiento y con ello vienen las movilizaciones. Finalmente se logró que la Contraloría General de la República solicitara la anulación del contrato de la empresa que suministraba dichos servicios.

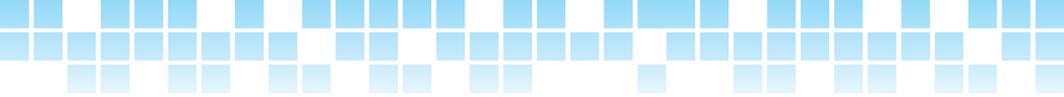
Resulta muy particular destacar que en el caso de Nicaragua muchos de los conflictos se resolvieron y alcanzaron un nivel de éxito gracias a las alianzas establecidas entre distintos actores y particularmente con los diputados del FSLN de forma específica los conflictos relacionados con salud y educación (Serra 2006; Almeida y Walker 2007). Esta situación se presentó también en El Salvador. No obstante, en el caso de Nicaragua y también de El Salvador uno de los principales retos pasa por mantener la autonomía del movimiento respecto a los actuales gobiernos de izquierda. En estos dos países pero sumándoles a ellos Costa Rica, se logra articular la movilización con la incidencia.

En Honduras los conflictos mas importantes del período en estudio fueron la huelga y la movilización de los maestros en el año 2004 y posteriormente el movimiento de resistencia que surgió por oposición al Golpe de Estado que tuvo lugar el 28 de junio del año en curso.

El magisterio en Honduras logro convocar a unos 60 mil maestros (al menos unos 35 mil lograron movilizarse entre mayo y julio de 2004) para defender el Estatuto del Docente amenazado por las presiones de los organismos financieros internacionales que entre otros objetivos buscaban reducir el gasto público. Este conflicto se venía gestando desde el año 1998 y sobre todo en el año 2003 cuando se aprobó la Ley del Sistema redistributivo y la Ley del Presupuesto afectando con ello las condiciones del trabajo docente. El conflicto se resolvió luego de intensas manifestaciones con el acuerdo de respetar el Estatuto del Docente hasta el año 2006. Posteriormente el gobierno de Manuel Zelaya decidió no confrontar al magisterio transfiriendo recursos de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza lo que a su vez le genero algunas críticas a su gobierno.

Por su parte el movimiento Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado ha sido la mayor movilización de la historia del país. No solo por la cantidad de ciudadanos y sectores movilizadas, sino también por el tiempo que duro dicha movilización (más de 150 días en las calles), hasta que la represión y el decreto de estado de sitio permanente logro contenerla. Además por el carácter aglutinador del acontecimiento que convocó a los sectores menos conservadores de la sociedad hondureña y que creen en las salidas políticas, no militares de los problemas y conflictos. Como consecuencia El Movimiento Nacional de Resistencia se ha constituido en uno de los actores y en una de las fuerzas sociales más importantes para la gobernabilidad democrática y para el futuro social y político del país, aun cuando los opositores se nieguen muchas veces a ese reconocimiento.

Si bien las protestas contra el golpe de Estado en Honduras desbordan, la resistencia a un simple neoliberalismo, si es una protesta contra las formas de capitalismo reciente que se articulan bien con modalidades políticas. Es una protesta contra un proyecto de dominación que niega la posibilidad de profundizar



la democracia, contradictoriamente es también una protesta contra la ruptura del orden democrático. Este es un movimiento que a mediano plazo se plantea la posibilidad de una constituyente, profundizar la democracia ofreciendo contenidos sociales a la misma, constituyéndose en un proyecto político alternativo al modelo bipartidista y tradicional hondureño. Aquí su reto es principalmente organizativo y de capacidad de movilización cuando se requiera.

Género y ciudadanía en Centroamérica

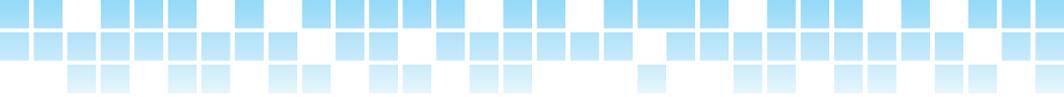
Por el peso demográfico de las mujeres, por su contribución estratégica y diferenciada al desarrollo y por las condiciones históricas de exclusión y subordinación, este sector es fundamental en la construcción de ciudadanía y la democracia en la región. Un aporte particularmente importante es su contribución a establecer las fronteras difusas entre lo público y lo privado en tanto estos ámbitos son politizables, así como la vida cotidiana misma.

Si bien es cierto que a nivel de sociedad y de gobiernos hoy es más visible y se reconoce la equidad de género, en relación a los mercados de trabajo, la participación política y las formas de dominación y de violencia en el hogar, entre otros temas estratégicos, los avances son insuficientes y limitados.

En el ámbito laboral se constata la precarización del empleo femenino y las desigualdades de ingreso respecto a los hombres, persiste el analfabetismo con tasas altas para las mujeres. Si bien crece la esperanza de vida para las mujeres, esta situación no se convierte a lo largo del tiempo en mejoras de la calidad de vida. Los problemas de salud sexual y reproductiva siguen siendo graves por las altas tasas de mortalidad materna (principalmente entre las mujeres rurales e indígenas) y el embarazo de adolescentes. La violencia de género es particularmente grave (AECI, 2006:7).

Respecto a la participación política de las mujeres ésta se ha visto disminuida por la caída de la representación en los más altos cargos públicos (excepto Guatemala y El Salvador). Se aprecian avances a nivel local y en los Congresos o Parlamentos a excepción de Costa Rica la representación es todavía muy baja.

Mas allá de las políticas de equidad sectoriales es importante que se fortalezcan los intereses prácticos y estratégicos en



los múltiples espacios donde las mujeres tienen presencia y deben participar. Las medidas afirmativas como los sistemas de cuotas son importantes aunque ello depende del formato electoral y de las prácticas políticas. Al mismo tiempo que se busca fortalecer la representación de las mujeres en el espacio público y en los órganos de decisión, es fundamental mejorar el liderazgo de las mujeres (Córdova, 2001:421). Además es importante fortalecer las redes regionales existentes (por un desarrollo equitativo) las que a su vez son indicadores de nuevas formas de integración.

Cabe destacar que los logros obtenidos por las mujeres y los distintos sectores que las apoyan, obedecen principalmente a la activación ciudadana de las mujeres, a sus movilizaciones y a su capacidad de incidencia en las distintas agendas públicas.

La urgencia de una ciudadanía regional y global

La interconexión del mundo no sólo en el plano económico sino también cultural, al mismo tiempo la existencia y la mayor conciencia de problemas globales cada vez más compartidos, como la crisis ambiental, el crimen internacional y las desigualdades sociales; asimismo la presencia creciente de las migraciones internacionales, la concentración del poder de empresas transnacionales y en pocos países, todos estos fenómenos además, tienen lugar en un contexto global marcado por la revolución tecnológica que transforma las dimensiones de tiempo y lugar. Así también están presentes temas como los derechos humanos, el desarrollo, la discriminación y la guerra. Desde el punto de vista de la evolución de la ciudadanía se puede conocer cómo se ha pasado de la ciudadanía de la ciudad- Estado, a la ciudadanía del Estado-nación y últimamente a la ciudadanía mundial. Es decir, que los derechos ciudadanos exigen hoy un tipo de derechos globales con asiento también y complementados a nivel local (Borja, 2004:10).

A nivel regional y global cada vez más se comparte información, conocimientos, se coordinan acciones desde la plataforma tecnológica de internet, se forman foros electrónicos y comunidades virtuales, se crean espacios formales-informales e interactivos tanto individuales como colectivos. En estos espacios se construyen significados, se recrean y muchas ideas y acciones se resignifican. Estos son también lugares de “negociación de imaginarios”. La tecnología se convierte en un instrumento para el ejercicio de los derechos y deberes regionales y globales (A. López).

Por otro lado, crece el convencimiento de que cada vez más los problemas locales y nacionales distan mucho de ser resueltos sin la correspondiente articulación global dada su natu-

raleza constitutiva. En este contexto tienen lugar las luchas de movimientos sociales de perspectiva global como el Foro Social Mundial o el movimiento ATTAC (por la regulación global del capital financiero), entre otros.

EL Foro Social Mundial nos enseña que existen diversas formas de opresión y de poder en sus dimensiones globales como nacionales. Entre ellas se destacan: espacios estructurales de poder como formas de sociabilidad, el espacio tiempo doméstico donde la forma de poder es el patriarcado, el espacio tiempo de la producción donde el modo de poder es la explotación, el espacio tiempo de la comunidad, donde la forma de poder es la diferenciación desigual, entre quienes pertenecen a la comunidad y quienes no, el espacio estructural del mercado donde la forma de poder es el fetichismo de las mercancías, el espacio tiempo de la ciudadanía. Aquí la forma de poder es la dominación, el hecho de que hay una solidaridad vertical entre los ciudadanos y el Estado, el espacio tiempo mundial en cada sociedad donde la forma de poder es el intercambio desigual (Sousa Santos; 2003).

Las características dominantes de la globalización sin embargo, como “globalización imperial-capitalista” plantea el reto de revalorizar y reconstruir el universalismo democrático. Más en concreto se trata de recrear una cultura de los derechos humanos como agenda de la humanidad y crear condiciones y garantías para su ejercicio en los distintos ámbitos: locales, nacionales, regionales y globales donde convergen viejas y nuevas dimensiones de la ciudadanía (Borja, 2004;12).

Por tanto la agenda de la ciudadanía global pasa por luchar por un trabajo decente, justo y equitativo, derechos sociales, derechos civiles y políticos, derechos culturales para todas las personas en el territorio que habitan, derecho a la paz y seguridad global, derecho a la calidad ambiental. Así también el derecho a un comercio justo, complementado con regulaciones

sobre el capital financiero y las empresas transnacionales. Muy importante también es el tema de la gobernabilidad global a la que una ciudadanía constituida, activa y democrática puede contribuir sustancialmente.

Como Borja sostiene, en la actualidad existen bienes y derechos cuyo acceso son indispensables para la supervivencia individual y colectiva que ya no se pueden garantizar únicamente en ámbitos nacionales: el agua, la tierra, la energía, la identidad cultural, la igualdad de género, el derecho al desarrollo, a la seguridad alimentaria, el acceso a productos genéricos y a la investigación para atender enfermedades que afectan a los más pobres, el derecho a la información (el acceso para todos y el control de los medios que garantizan la producción y el acceso a informaciones), el derecho al laicismo como garantía de las libertades.

Un punto importante en el tema es el papel de los actores que pueden hacer posible esta ciudadanía regional y global. Algunas organizaciones y movimientos sociales ya mencionados trabajan en este ámbito y por tanto tienen ya un camino recorrido. Se hace necesario sin embargo, fortalecer estos espacios y crear una nueva institucionalidad que garantice los derechos y responsabilidades globales.

En Centroamérica es urgente que la sociedad civil y los sectores sociales que buscan alternativas, aceleren el paso porque en la última década, tal y como ha mostrado Alexander Segovia, los grupos económicos como integración real, hoy día tienen influencia (bastante efectiva) no sólo a nivel local sino también a nivel regional. Esta influencia, que se ejerce por mecanismos informales no institucionalizados, por su enorme poder económico, por su rol en el financiamiento de las campañas políticas y su influencia en los medios de comunicación; profundiza la dependencia tradicional de los Estados sobre el “poder estructural capitalista”(Segovia, 2005;86-91) y genera mayores asimetrías

sociales. Además debe tenerse en cuenta que la búsqueda de alternativas como sub-región es una condición importante de su propio desarrollo donde la construcción de la ciudadanía activa y democrática se constituye en la base de tales procesos.

En el caso particular de Centroamérica la sociedad civil, las universidades y algunos sectores de las iglesias comprometidas con el desarrollo equitativo, pueden jugar roles importantes en la promoción y la defensa de los derechos de la ciudadanía, asumiendo por supuesto las responsabilidades que el proceso conlleva. La sociedad civil, heterogénea y fragmentada, tiene algunos antecedentes en la región y de cara a los procesos globales, como la Iniciativa Civil de Integración Centroamericana (ICIC) que ha pretendido mayor participación e incidencia en las políticas públicas y en la transformación del Estado (Gorostiaga, 1996). Las universidades por su parte pueden asumir un protagonismo importante en liderar la transformación de los sistemas educativos desde una agenda que permita un nuevo contrato social y un desarrollo equitativo. El año 2008 en el Congreso Científico de la Universidad Nacional de Honduras se hablaba de centroamericanizar las universidades para asumir colectivamente los desafíos de la globalización. La integración de las universidades más allá de los estándares curriculares y las respectivas acreditaciones es fundamental. En este marco es importante abrir estos espacios a sectores que no han tenido mayor participación en la agenda universitaria como los estudiantes: hacia una verdadera integración de los estudiantes centroamericanos.

Es de considerar que dadas las características de la sociedad civil centroamericana (de fuentes ideológicas no homogéneas, marcadas por las culturas políticas nacionales, con ambigüedad frente a lo gubernamental, con agendas sectoriales diversas, etc.) con alguna experiencia y camino recorrido en los temas de interés particular, necesita ella misma ser fortalecida: aplicarse las recetas recomendadas (transparencia, mayor democratización en

las decisiones, representatividad y legitimidad en relación a las bases, manejar el personalismo de su liderazgo, enfrentar las dificultades de sostenibilidad institucional y financiera, la capacidad de movilización y de propuesta). De esta manera la construcción de una ciudadanía activa regional contribuyen tanto los procesos nacionales como la conformación de una sociedad civil regional y global (Serbin, 2006).

Igualmente importante es abrir y fortalecer los espacios regionales en temas de género y de juventud como grupos y sectores excluidos. El tema de la violencia que afecta ambos sectores, así como la marginación de la toma de decisiones sobre los aspectos que afectan su vida, la desigualdad económica y en general el deterioro de la calidad de vida de los grupos sociales con mayores desventajas, son cuestiones fundamentales que pasan por la participación activa de estos grupos.

Por otro lado, las características de la violencia y principalmente del crimen organizado en Centroamérica, como un obstáculo serio para el desarrollo, invitan a la definición y fortalecimiento de estrategias regionales realmente efectivas y preventivas. De igual forma ocurre con el tema ambiental donde Centroamérica puede no solo aprovechar sus ventajas competitivas, sino también porque la forma de abordar una cuestión estratégica como la ecológica, la ubica en clave de desarrollo o en una mayor profundización de las desigualdades.

Asimismo una propuesta importante que se abre paso en la región, como ejemplo, aparte de las ya mencionadas, aunque con características más continentales, pero también con nexos mundiales, es la Plataforma Laboral de las Américas que pretende ser una respuesta posneoliberal de los sindicatos a los desafíos del trabajo y del capital. Esta respuesta es una convergencia de sindicatos con orígenes ideológicos diversos pero que han vivido los reveses de las políticas de ajuste en la región.

La Plataforma Sindical de las Américas se propone estrategias de desarrollo democráticas que sean alternativas al neoliberalismo y al ALCA. Es una apuesta por una sociedad del trabajo que supere la lógica del mercado. Pretende además acuerdos con partidos, movimientos sociales que busquen alternativas de desarrollo económico y social, por tanto ve en la política un elemento clave en la articulación de la sociedad. Junto a la plataforma converge en la región la propuesta de la OIT, quien propone una agenda de trabajo decente en América Latina, a través del diálogo social y una relación correcta entre derechos laborales y productividad, desde la libertad sindical (Godio, 2007: 102-107).

Al mismo tiempo es importante reivindicar el trabajo y todo su potencial democrático. Boaventura de Sousa (2005) señala que es necesaria una mejor distribución democrática del trabajo, ello está asociado con la necesidad de reducir la jornada de trabajo y lograr pactos mínimos de relación salarial en los acuerdos internacionales de comercio, es importante también el logro de una distribución equitativa del trabajo y sobre todo para los migrantes (donde se respete la igualdad y la diferencia), ver el trabajo como criterio de inclusión y no de exclusión como ha sido hasta ahora, fomentando además la formación profesional; gravar las transacciones financieras especulativas (tasa Tobin) a favor del trabajo productivo, condonación real de la deuda de los países pobres y la reinención del movimiento sindical para afrontar la lucha local y global, donde sus reivindicaciones pasen por todo aquello que afecta la vida de los trabajadores.

El papel de los movimientos sociales y de las colectividades

La construcción de la ciudadanía exige el protagonismo de los movimientos sociales y/o de la acción colectiva. Los altos niveles de violencia, la degradación ambiental, la desigualdad y la pobreza, así como las distintas formas de dominación, no pueden ser enfrentados sin una estrategia que parta de la acción colectiva y de los movimientos sociales. A ello se puede agregar, dadas las condiciones actuales, que “producir y participar” son dos claves necesarias y urgentes en la construcción de sociedades alternativas, en las que los movimientos sociales y las estrategias colectivas son fundamentales. En consecuencia su complementariedad exige crear opciones autogestionarias y propositivas, así como redefinir el Estado desde la democracia participativa y deliberativa.

La redefinición del Estado implica, en la perspectiva de Sousa Santos (2005), ver al Estado como novedoso movimiento social. El Estado se repolitiza como elemento de coordinación social donde la lucha democrática es la lucha por la democratización de la coordinación social. Estas luchas requieren un contexto de democracia participativa y deliberativa que incluye solidaridad fiscal y fiscalidad participativa. De esta forma el Estado deviene en un espacio de experimentación como luchas democráticas por esquemas institucionales alternativos, donde coexisten y compiten diversas soluciones que son sometidas a evaluaciones ciudadanas desde los criterios de eficacia y calidad democrática. Se reconoce sin embargo, que el Estado debe crear igualdad de oportunidades para las distintas propuestas y condiciones mínimas de inclusión para que se haga posible la lucha distributiva de la democracia.

La necesidad de una participación más colectiva y de los movimientos sociales se justifica también porque los sectores

subalternos y en desventaja, más aquellos grupos que apuestan por sociedades más justas y democráticas, necesitan articularse alrededor de una agenda más o menos compartida. Estos sectores, contrario a lo que ha ocurrido con los grupos de poder en Centroamérica que si han aprovechado el Estado y su capacidad de organización informal para acumular (Según Alexander Segovia el comercio intraregional en Centroamérica paso de 671.2 millones de dólares en 1990 a 3,439 en el año 2005) y poner las reglas del juego a su favor, se encuentran muy desarticulados, otros tantos desorganizados sin constituirse como actores o como ciudadanía activa, sin propuesta y sin capacidad de protesta.

-30-

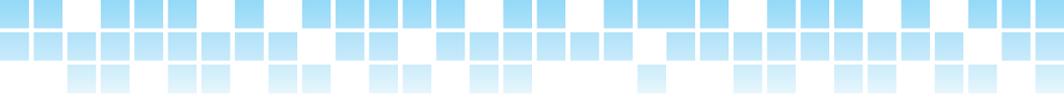
Por otro lado, si además se señala que en las ciudades se define el futuro de la democracia, esta última no podrá lograrse sin la construcción de una ciudadanía activa y democrática fortalecida desde los contenidos (reivindicaciones, resolución de problemas por sí mismos, democratización de las reglas del juego, la lucha por una mejor distribución del poder, la proposición de valores y sentidos, aporte de modalidades innovadoras en la resolución de conflictos, entre otros) que los movimientos sociales pueden ofrecer a los procesos de democratización y al desarrollo de la sociedad.

Como se ha planteado en este trabajo, la articulación de un proceso cultural que defienda y promueva la hegemonía de los valores de una sociedad alternativa realmente justa, democrática y ambientalmente sostenible, con un proceso social que movilice a los interesados por este proceso de cambio, requiere de una ciudadanía activa (sobre todo organizada) como condición y resultado a la vez de tales procesos. Los movimientos sociales son además escuelas de ciudadanía. Desde esta perspectiva los movimientos sociales son gestores de nuevos valores y de sentidos, por tanto la acción colectiva no se agota en los objetivos proyectados.

Por otro lado en la región es importante destacar el papel y los logros del movimiento social en el Foro Mesoamericano como espacio de lucha contra el capital y las distintas formas de opresión. También se vuelve muy relevante analizar la participación de las organizaciones populares y las redes sociales en la Alternativa Bolivariana para las Américas, principalmente en Nicaragua.

En el marco del último Foro Social Mundial celebrado en Nairobi (enero de 2007) la declaración de los movimientos sociales destaca que se han conformado redes internacionales de la sociedad civil y de los movimientos sociales. Se ha reforzado el espíritu de solidaridad y las luchas contra todas las formas de opresión y de dominación. Sin embargo, también señalan que es urgente avanzar hacia alternativas que sean realmente efectivas. Los foros sociales también son vistos como una nueva forma de hacer política, sin pretender la verdad única y el modelo único alternativo a la sociedad dominante. En este marco se ha aprendido el diálogo democrático y la coordinación de las luchas. Estas luchas son posibles sobre las redes que permiten las nuevas tecnologías. En este sentido es necesario aprovechar las redes que permiten generar espacios de democratización en la red y coordinar las luchas. Un ejemplo de ello es el movimiento por la justicia global que como proyecto político alternativo se coordina de forma global, es a la vez informacional en la medida en que se lucha contra los símbolos del capitalismo global y se conforma desde redes flexibles y descentralizadas.

No se trata sin embargo de buscar cualquier alternativa. En el plano más global, según Win Dierckxsens (2003) se necesitan consensos para planificar el bienestar colectivo de la humanidad. Tomar la conciencia de que compartimos un solo mundo, por tanto se requiere mayor responsabilidad y equidad, una nueva racionalidad económica, una “economía de lo suficiente”. Para este autor temas como la propiedad intelectual deben ser



vistos como patrimonio de la humanidad como ya Keynes lo había planteado, regular la vida media de los bienes de consumo duradero, medir la riqueza en términos de valores de uso, siguiendo a Cobb y Halstead (1996) propone sustituir el PIB por un Indicador Del Progreso Genuino (IPG) que mida el consumo y deterioro de los recursos naturales como costo contrapuesto a los ingresos logrados, el IPG además mide la durabilidad de la vida y también su calidad (en este sentido la medicina preventiva es más prioritaria que la curativa, la producción de artículos de buena calidad es más prioritario para evitar su reparación y medir los gastos improductivos como los de defensa en función de la calidad de vida). Dierckxsens propone también el ingreso ciudadano por pertenecer a la sociedad y no por la vinculación al mercado.

BIBLIOGRAFIA

Almeida, Paul y Walker, Érica. “El avance de la globalización neoliberal: una comparación de tres campañas de movimientos populares en Centroamérica”. Revista de Ciencias Sociales N°1, julio, 2007.

AA.VV. El Estado de la Región. San José, 2008.

Borja, Jordi. Ciudad y ciudadanía. Dos notas. WP, N° 177, Instituto de ciencias políticas y sociales, Barcelona, 2000.

---- La ciudad y la ciudadanía. Ciudad Política, enero de 2007.

Córdova, Ricardo y Maihold, Gunthaer. Democracia y ciudadanía en Centroamérica. El Salvador, 2001.

Cuenca, Breny. Las luchas sociales en Centroamérica. OSAL, mayo-agosto, CLACSO, 2001.

Figuroa, Carlos. “Protesta popular y cooptación de masas en Guatemala”. En: Caetano, Gerardo (comp). Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina. CLACSO, Buenos Aires, 2006.

Gorostiaga, Xabier. Hacia el 2015: tendencias dominantes en Centroamérica. Discurso Inaugural del II Encuentro Mesoamericano de Filosofía, realizado en Managua, 1996.

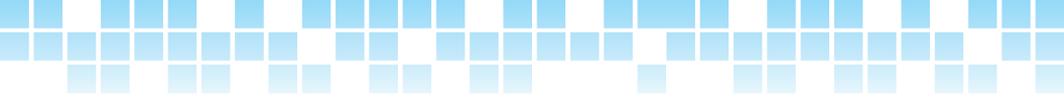
Juárez, Jorge. Movimientos sociales y neoliberalismo en El Salvador: huelga de médicos y trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Diálogos, Revista Electrónica de Historia, feb-septiembre N 001 UCR, 2007.

Moreno, Ismael. “El conflicto magisterial: crónica de un proceso inconcluso”. Revista Envío N° 5, ERIC, agosto –septiembre de 2004.

Simona Yágenova. Hacia donde se encaminan las luchas de los movimientos sociales, OSAL, N° 19 enero-abril 2006).

Oxhorn, Philip. “Desigualdad social, sociedad civil y los límites de la ciudadanía en América Latina. Pensamiento Propio N° 15 enero-junio 2002.

Sojo, Carlos. “Cohesión social y exclusión. Una mirada desde Centroamérica. Quórum 18, 2007.



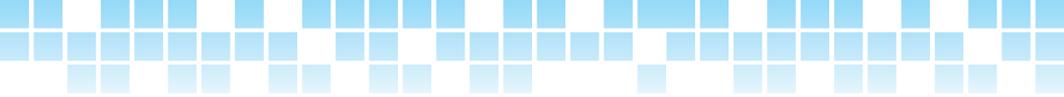
Segovia, Alexander. Integración real y grupos de poder económico en América Central. Friedrich Ebert, San José, 2005.

Serra, Luis. “Las luchas sociales en Nicaragua en el contexto electoral”. OSAL, mayo-agosto de 2006.

Sousa, Boaventura. Renovar la teoría y reinventar la emancipación social. Buenos Aires, 2006.

----- Reinventar la democracia. CLACSO, 2005.

Torres, Edelberto. La piel de Centroamérica. FLACSO Costa Rica, 2007.



Este documento se terminó de imprimir en los
Talleres Litográficos de G&F IMPRESIONES,
en el mes de abril de 2010.

Su tirada consta de 250 ejemplares.

